

¿QUÉ PASA EN ESPAÑA?

JOSÉ MARÍA RIDAO

El pasado mes de octubre, el gobierno de José María Aznar anunció su intención de aprobar un plan para unificar la enseñanza de las humanidades —y, en particular, de la historia de España— en las diferentes Comunidades Autónomas en que está dividido el país. Con esta medida, los conservadores trataban de dar cumplimiento a una de sus promesas electorales, realizada en el crispado ambiente político que alcanzó sus más altas cotas entre 1993 y las elecciones de 1996, en las que concluyeron catorce años de hegemonía socialista. Durante esos tres años de insoportable degradación de la vida pública, el Partido Popular acusó a Felipe González —obligado a gobernar con el apoyo parlamentario de los nacionalistas catalanes— de hacer concesiones inaceptables con el único propósito de mantenerse en el poder. Del mismo modo, reprochó a los nacionalistas catalanes prevalerse de la debilidad del gobierno central para avanzar en su proyecto contrario a la unidad de España.

Las elecciones de 1996 se saldaron con una victoria del Partido Popular, que, pese a lo anunciado categóricamente por las encuestas y medios de comunicación, no le otorgaba la mayoría parlamentaria ni, por tanto, la posibilidad de gobernar en solitario, sin necesidad de apoyarse en otros grupos. Fue preciso, pues, que, al igual que el partido Socialista en su última etapa, tuviera que pactar con los nacionalistas catalanes. Las concesiones de José María Aznar no sólo han doblado las que tanto reprochó a Felipe González, sino que han introducido, además, graves asimetrías en la organización territorial y económica del país. Tantas que, de algún modo, parecería que los conservadores hayan estado buscando desde el momento de su ajustado triunfo electoral recomponer en un ámbito simbólico la unidad que niegan con su acción política diaria, y que tanto les preocupó en el pasado. Es en este contexto donde se inscriben algunos de sus decretos más polémicos, como el que regulaba el uso del himno nacional o el que contenía el plan para unificar la enseñanza de humanidades.

Por sorprendente que resulte, la opinión del país

se polarizó durante unos meses en torno a esta última iniciativa del gobierno, que acabó siendo derrotada en el parlamento por el voto contrario de la totalidad de las fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular. Ahora bien, apenas apagados los ecos de la polémica, quedan algunas preguntas en el aire. En concreto, ¿qué fibra sensible acabó rozando la propuesta del gobierno para producir una reacción tan generalizada ante una cuestión en principio tan poco inmediata como la enseñanza de la historia? ¿Qué viejos fantasmas desenterraba el plan de humanidades de los conservadores? ¿Qué extraña relación tienen los españoles con su pasado? ¿Qué temen de él, qué les incomoda o asusta? En definitiva, ¿qué pasa en España?

A poco que se mire en perspectiva, el panorama político al que asiste España desde 1993 es el propio de un país que se adentra en la espiral del sectarismo. En aquella fecha, algunos líderes empezaron a solicitar una segunda transición, como si la primera les resultara no ya insuficiente, si no incluso indiferente y ajena. Los valores que presidieron el cambio político tras la muerte de Franco parecían no merecerles mayor consideración, al tiempo que la dura oposición que ejercían era elevada a la categoría de proyecto de regeneración, de auténtica cruzada contra el "régimen felipista". Un régimen que, según decían los conservadores entonces y siguen diciendo ahora, había unido a España en la corrupción. Un régimen que, además, sólo se mantenía gracias al apoyo interesado y mezquino de los nacionalistas. Algo que los conservadores decían entonces, pero que ni remotamente dicen ahora.

Constituyó sin duda una inmensa suerte el que el resultado de las elecciones de 1996 fuera el que fue. Y una suerte aún mayor el que dos partidos y dos líderes condenados a no entenderse, como Aznar y Pujo, hallaran en los criterios de Maastrich un discurso político verosímil con el que arropar un pacto de gobierno inverosímil. Gracias a ello estamos asistiendo a un fenómeno singular, y es que los partidos que aseguran la gobernabilidad no lo hacen sobre la base de

la confianza, sino del absoluto recelo y el conflicto constante. Se da así la paradoja de que cuanto más se acerca España a los criterios de convergencia más parecen quebrarse, simultáneamente, los puentes en su interior. De que cuanto más se corre hacia la Europa del futuro más atención reclaman los viejos problemas, los fantasmas de siempre.

El último en hacer acto de presencia ha llegado de la mano del ministerio de educación, en forma de plan para unificar la enseñanza de humanidades. En asuntos relacionados con la simbología nacionalista, la temperatura política no ha cesado de subir durante los últimos meses, curiosamente los mismos en que se han consolidado las expectativas españolas en relación con el euro. Primero fue la tibia reacción del gobierno central al abucheo del cantante Ramón, reducido, como todo, a simple anécdota. A continuación fue el intento de regular el uso del himno nacional, tratando absurdamente de exigir por vía legal las manifestaciones de respeto a una partitura. Finalmente le ha tocado el turno a la historia.

Probablemente tienen razón los nacionalistas cuando se quejan del procedimiento, y niegan haber sido consultados para aprobar el plan. El gobierno central asegura lo contrario, pero muchos ciudadanos piensan que su credibilidad es limitada, al recordar las especies que puso antes en circulación. Por otra parte, tienen sin duda razón los nacionalistas cuando expresan sus reservas sobre el fondo. La visión de la historia que manejan los conservadores es, como dijo Pujol, "una música que ya hemos oído otras veces". Es, en definitiva, la visión del nacionalismo español.

Ese nacionalismo que, desde sus orígenes, hace españoles a Séneca y Trajano, niega la aportación judía y musulmana, considera en pie de igualdad Reforma y Contrarreforma, desprecia los valores de la Ilustración y acaba, con la generación del 98, dando forma a esa falacia de que España y Castilla son sinónimos. Catalanes, vascos y gallegos han sido víctimas de esta visión. Pero tan víctimas como los demás. Tan víctimas como la propia Castilla, porque para poder hablar de hechos diferenciales en Cataluña, Euskadi o Galicia es preciso aceptar, con el nacionalismo noventayochista, que España es Castilla. Porque si no Castilla sería tan diferencial respecto a España como lo son aquellas tres comunidades. Como lo serían también Andalucía, Canarias o Extremadura.

En cualquier caso, lo importante a estas alturas no es subrayar lo que muchos ciudadanos ya imaginaban, la mutua dependencia entre la idea catellanista de España y los nacionalismos periféricos. Su permanente disputa dentro de un mismo espacio simbólico, acotado por himnos, banderas o lenguas.

La parcialidad y mitificación desde la que escriben sus respectivas historias. Lo importante es correr el velo con que el nacionalismo español ha ocultado una realidad varias veces centenaria, y de la que los nacionalismos periféricos se presentan hoy como únicas víctimas. España, toda España, ha padecido una larga historia de gobiernos no sólo incompetentes, sino sobre todo sectarios. Esto es, gobiernos que, salvo contadas excepciones conseguían con sus acciones abrir fisuras donde no las había y profundizarlas allí donde existieran. Gobiernos que, además, no tenían inconveniente en imponer sus criterios a sangre y fuego.

Aunque los ciudadanos y hasta los propios protagonistas se hayan acostumbrado a la hagiografía fácil, a la que alaba lo que se hizo pero silencia lo que se dejó por hacer, la transición democrática española representa un punto de inflexión en aquella lamentable historia. A partir de él era posible un nuevo comienzo, desactivar los viejos problemas y enterrar los fantasmas de siempre. En lugar de ello, algunos líderes creyeron preferible una segunda transición, la que hoy vivimos. La responsable de que, hartos del insulto y la permanente criminalización, los antiguos responsables socialistas hayan hecho lo que pese a todo, no debían haber hecho, y es entrar al trapo. La responsable de que los nacionalistas —los castellanistas y los otros— se vayan envolviendo cada vez más en sus banderas y haciendo más impermeables sus respectivas identidades.

Frente a este panorama, ¿seremos capaces de detener la espiral del sectarismo? ¿Conseguiremos que se queden gesticulando a solas quienes quieren la regeneración no porque haya nada que regenerar, sino porque así pueden criminalizar mejor a quienes les precedieron en el poder? ¿Dejaremos de una vez tranquilos a don Pelayo, y a Guifré el Pelòs, y a los ancestros milenarios a orillas del Bidasoa, y las *Folhas novas*? Es difícil saber cuál puede ser en el futuro el precio de no hacerlo. Con todo, el que estamos pagando ya en el presente es una vida pública con querrelas pero sin debates, con exabruptos pero sin razonamientos. En suma, un autentico calvario de bronquedad y antipatía.

Entre las diversas actitudes adoptadas con motivo de la polémica sobre el plan de humanidades, destaca la de algunos partidarios del decreto que rechazan, pese a ello, compartir la visión del nacionalismo español. En la interpretación que hacen estos intelectuales no necesariamente conservadores, los únicos nacionalistas son los que así se consideran. Los que como los vascos, catalanes o gallegos, habrían aprovechado el debate sobre la historia para —según esta versión— subrayar una vez más los rasgos exclusivistas e identi-

tarios de su discurso, para defender su representación amputada del pasado.

Desde luego, nadie que contemple en perspectiva estos veinte años de democracia podrá pasar por alto los efectos no siempre positivos de los nacionalismos periféricos. A sus manifestaciones más extremas se deben muchos de los dramas vividos en este tiempo, así como la mayor parte de los riesgos que han corrido las instituciones democráticas. A los nacionalismos moderados, por su parte, se les empezaría a deber en estos días la indiferencia ante la quiebra de ciertos valores generales, como, por ejemplo, la no discriminación por razón de origen, cada vez más fragilizado e ignorado en su actuación. Cabría reprocharles, además, el que estén haciendo de la Europa unida no un proyecto compartido por todos, sino un proyecto del que cada cual dispone a su manera.

Defender éstas o parecidas críticas al nacionalismo periférico no debería llevar, sin embargo, a colocar la razón en el otro lado. Al menos, no debería llegar con la facilidad y el aplomo con que se ha hecho a raíz del decreto sobre las humanidades. Primero, porque desde esta actitud es difícil entrever ninguna salida al problema, quizá uno de los que van más directamente al nervio de la convivencia en España, uno de los que más puede afectar a nuestro futuro. Segundo, porque tal vez la historia de España no es tan simple ni tan lineal como se pretende, no está tan jalonada de evidencias transparentes y desnudas.

En este sentido, uno de los principales razonamientos en que coinciden quienes defienden el decreto es que, nos guste o no, el ideal cristiano y su recurrente imposición por la fuerza están ahí, inamovibles en el pasado de todos, incluido el de vascos, catalanes o gallegos. Ahí están también la Contrarreforma, los Decretos de Nueva Planta, el absolutismo del XIX, el desastre colonial, la guerra civil o el exilio de 1939. Aunque nos incomode y hasta nos repugne, los españoles no tenemos otro pasado y, por tanto, lo único que podemos hacer es asumirlo —unos con más desagrado que otros— y confiar en que nada parecido vuelva a repetirse.

El problema de estas afirmaciones es que, pese a su aparente objetividad, plantean la cuestión en los mismos términos que los nacionalistas periféricos y, precisamente por ello, hacen imposible cualquier debate que no consista en un perpetuo giro en redondo. Claro que para ser un español instruido hay que tener un conocimiento, aunque sea vago, de esos referentes históricos. Tan claro que, precisamente por eso, quienes prefieren ser catalanes, vascos o gallegos instruidos antes que españoles instruidos empiezan por echar mano de su propio arsenal de referentes. Si se les reprocha que serán ignorantes por desconocer

la historia de España, responderán que no más ignorantes que los españoles que no conozcan la de Cataluña, Euskadi o Galicia.

Por el camino que van las cosas, quizá se alcance un acuerdo sobre los contenidos mínimos que deberán estudiarse en todas las Comunidades. Y aunque resulta sin duda preferible esa solución a la situación que hoy vivimos, tal vez convendría recordar que ese posible pacto sobre la historia resolvería sólo una parte de lo que sucede. Porque lo que sucede es que, pese a siglos de historia compartida, los españoles no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo sobre nuestro pasado, proyectando una y otra vez sobre el presente esa discrepancia. Como resultaría obvio a poco que se razonase con serenidad, la fuerza que nos separa no procede sólo de que se mencionen o se olviden unos hechos que ocurrieron cien, doscientos, trescientos años atrás. Esa fuerza, violenta y hasta brutal en tantas ocasiones, reside también y sobre todo en la manera en que esos hechos se incorporan a nuestra vida cotidiana. En definitiva, a la voz que nos los narra.

Una voz que dice, por ejemplo, que los españoles expulsaron a los judíos y a los musulmanes, cuando lo que debería decir es que los cristianos españoles expulsaron a los españoles musulmanes y judíos. Una voz que dice que Europa hizo la Reforma y España la Contrarreforma, cuando lo que debería decir es que en España triunfaron los enemigos de la Reforma sobre sus partidarios. O que se asegura que la ilustración apenas existió en nuestro país, cuando lo que debería decir es que los ilustrados españoles fueron marginados, acusados de afrancesamiento. Como es fácil advertir, ser español ha sido para esa voz el privilegio de un grupo cada vez menos nutrido, en tanto el número de los excluidos no ha cesado de aumentar. Por eso, cuando, andando el tiempo, la voz que narra afirmó crudamente que Castilla hizo a España, convirtiendo en verdad absoluta lo que no era más que una opinión del 98, lo que hizo fue colocar a catalanes, vascos y gallegos fuera del relato, de la historia. Y estos reaccionaron como no podía ser de otra manera, reivindicando su propia voz.

La misma voz a la que hoy se acusa de amputar el pasado común de los españoles, sin advertir ni reconocer que es resultado de una amputación anterior. Una amputación sobre la que se construyeron los mitos del nacionalismo español, tan excluyente, tan identitario y, en definitiva, tan activo como están llegando a ser los nacionalismos periféricos, uno y otros atrapados en la misma espiral de sectarismo, uno y otros provocándose desde hace más de un siglo ya. Al reducir el problema de la historia al enunciado obligatorio de ciertos hitos, sin cuestionar la voz que, como una letanía, los ha ido narrando, el decreto se

coloca inevitablemente en un bando de los que toman parte en la polémica. El del nacionalismo español, el mismo cuya visión rechazan compartir algunos intelectuales que han salido en defensa de la unificación de las humanidades.

A más de dos décadas del inicio de la transición, lo único que se puede afirmar con rotundidad es que la España de hoy no es la España de hace veinte años, la España de la aprobación de la Constitución y del consenso. Entonces, recién desaparecido el general Franco, los problemas del país eran inmensos y omnipresentes los riesgos de involución, como lo demostraría la tentativa de golpe de Estado encabezada por el general Milans del Bosch y el teniente coronel Tejero. En contrapartida, la actitud política y ciudadana se esforzaba por superarlos y encontrar un espacio de convivencia aceptado por todos, una empresa en verdad inédita en la reciente historia de España.

En estos días, por el contrario, la situación resulta exactamente la inversa. Los problemas a los que se enfrenta España son los corrientes en cualquier democracia y los riesgos de involución se pueden dar por zanjados. Es, sin embargo, la actitud política y ciudadana la que parece empeñarse en deshacer el camino ya recorrido, la que parece regodearse en dañar y dificultar la convivencia. Como en otros tiempos de agitación y desasosiego, en la España de hoy parece que no hubiera dificultades colectivas por solventar, sino tan sólo reproches sectarios por hacer. Tanto es así que, como ha quedado patente desde las elecciones de 1996, algunos partidos y personajes públicos que durante estos años han buscado el poder y la influencia no pretendían tanto resolver lo que denunciaban, como realizar un inapelable reparto de responsabilidades.

Reclamar para sí la absoluta inocencia y acusar a los adversarios políticos de cualquier contratiempo que sufra el país resume, desde entonces, el grueso del debate público en España. De ahí que el parlamento haya llegado a tener menos valor que los tribunales en el juego político. De ahí que las controversias y los conflictos de intereses, normales en cualquier sistema democrático, no puedan ser resueltos en España más que con vencedores y vencidos. Con líderes y personas relevantes acudiendo a los juzgados e ingresando en prisión, rodeados de cámaras televisivas y micrófonos, mientras no pocas voces animan a que la ciudadanía se convierta en populacho, a que continúe alegre e irresponsablemente el esperpento.

Este punto de degradación no es, con todo, resultado del azar. Mucho menos de una fatalidad metafísica y siempre al acecho, una especie de España en permanente rebelión contra los propios españoles.

Son éstos, o mejor, algunos de éstos, los que, como señaló Azaña, "admiten y aplican un concepto de la nacionalidad y lo nacional demasiado restringido". Para ellos, "una sola manera de pensar y de creer, una sola manera de comprender la tradición y de continuarla son auténticamente españoles". Quienes no la profesan o la contradicen "no son buenos españoles, casi no son españoles". El hecho de que un gobierno de centro cediera el poder a los socialistas en 1982 produjo la impresión de que la mentalidad descrita por Azaña había desaparecido, si no en todos los estratos del poder heredado del franquismo, sí al menos entre los representantes de la nueva clase política.

Junto a esa idea, fruto más de una generalizada voluntad de concordia que de las evidencias, se fue consolidando además el convencimiento de que la España democrática había ido recogiendo y albergando todas las expresiones del pensamiento, todas las voces disidentes que habían sido silenciadas y marginadas por una larga tradición de gobiernos autoritarios, de los que el franquismo no había sido más que la última expresión. Sin embargo, y pese al optimismo y hasta la despreocupación que han reinado en este aspecto, la espiral de sectarismo desencadenada en 1993 ha venido a demostrar lo equivocado de este convencimiento y de aquella idea.

Algunas reacciones al reciente informe del ministerio fiscal sobre la defensa de las víctimas españolas en las tragedias chilena y argentina demuestra que hay en España quienes siguen manejando un "concepto de la nacionalidad y de la nación demasiado restringido", al aceptar que se renuncie a cualquier acción judicial no sólo con argumentos jurídicos, sino también ideológicos. Y no sólo eso. Demuestra, además y sobre todo, que, como también señaló Azaña, sigue existido entre nosotros una actitud política que sólo presta "a los métodos democráticos una adhesión condicional". En éste como en tantos otros casos a los que se ha asistido durante los últimos meses, el orden legal no parece ser un referente común y, por tanto, indisponible unilateral y sectariamente. Antes al contrario, su consideración parece muchas veces la de un instrumento político más que se ejerce o se inhibe según resulte útil o no a las necesidades del poder.

Por lo que se refiere a la recuperación de las voces disidentes, tampoco la hospitalidad de la España democrática ha venido a ser, al fin, tan general como se había imaginado. De entre todos los ejemplos que han proliferado desde 1993, de entre todos los fantasmas desatados por unos modos de hacer política que pesan como una losa sobre el ánimo de muchos españoles, ninguno quizá tan significativo como la exacerbación de los sentimientos nacionalistas. De alguna manera, el creciente papel de los partidos re-

gionales en la política de ámbito estatal empieza a ser considerada como una fatalidad, como un inevitable destino histórico que se repite en cada una de las raras ocasiones en que los españoles hemos vivido en libertad. No sólo los conservadores, también algunos sectores de la izquierda han comenzado a adoptar este discurso, desde el que concluye, como es lógico, la necesidad de un gran pacto central que cierre el paso a las reivindicaciones nacionalista de catalanes, vascos o gallegos.

Una vez más, la observación de Azaña sobre el manejo de "un concepto de la nacionalidad y de la nación demasiado restringido" resulta esclarecedora. A él sucumben unos y otros, con él se estimulan y se retroalimentan los del centro y los de la periferia, bajo su advocación identitaria se colocan todos, sin otras diferencias que el gentilicio, el himno, la lengua y el color de la bandera. Lo que ha venido a oscurecer las evidencias de esa escala sin fin es que, con demasiada frecuencia, el nacionalismo español se resiste a reconocerse como tal. Por otra parte, también los nacionalismos periféricos están interesados en negarlo, no sólo porque así desarman ideológicamente a su oponente, sino también porque de este modo evitan comparaciones no siempre honrosas. Y es quizá por la vía de este mutuo interés, de este propósito coincidente, por donde la democracia española ha dejado de incorporar algunas de las voces más valiosas de la disidencia.

Voces como la de Blanco White, quien al escribir en 1831 sobre la educación en España, señala que existen dos sistemas rivales, "condenados a proseguir su obra de convertir a la mitad de los españoles en extranjeros". Voces como la de Américo Castro, capaz de denunciar, ya en 1972, que algunas regiones españolas "son víctimas de su mistificación regional tanto como el resto del país". Voces, en fin, como la de Juan Goytisolo, quien confiesa no sentir solidaridad alguna "con la imagen del país que emerge a partir del reinado de los Reyes Católicos, sino con sus víctimas: judíos, musulmanes, cristianos nuevos, luteranos, enciclopedistas, liberales, anarquistas, marxistas. En los momentos históricos decisivos —concluye Goytisolo—, el bando que hubiera querido defender fue derrotado siempre". Todas estas voces, además de tantas otras que han

sobrellevado y sobrellevan incluso peor fortuna, tienen en común hacer visible y criticar ese "concepto de la nacionalidad y de la nación demasiado restringido" que señalaba Azaña, y hoy negado con demasiada precipitación.

Guste o no, son todas estas voces las que ayudarían a pensar el país de otra manera, las que permitirían reescribir la historia de España desde un punto de vista distinto, auténticamente liberal y no excluyente. Un punto de vista para el que no sólo serían españoles los vencedores en cada uno de los numerosos enfrentamientos civiles, sino también los derrotados. No sólo los que se ajustan a una estrecha y supuesta esencia que ha sido acumulativeamente cristiana, contrarreformista, antiilustrada, absolutista, castellana y nacional católica, sino también quienes la combatieron y cuestionaron en cada caso. En última instancia, ha sido la desatención hacia estas voces la que, entre otras causas, ha favorecido que el problema nacionalista aparezca siempre perturbando los periodos de libertad. Periodos en los que la tolerancia se ha entendido como una simple renuncia a la represión, no como una revisión y reformulación de la idea de España y de su historia, sin sectarismos ni amputaciones.

Por eso el problema de los nacionalismos periféricos rebrota inevitablemente con las libertades, porque, al mismo tiempo que en estos periodos se destierran los métodos del autoritarismo para acallarlos, no se expurgan las reminiscencias del nacionalismo español que los desencadenaron, no se erige una voz crítica e integradora que dé cuenta distinta de nuestro pasado y permita, por tanto, superar las huellas de anacrónicas diferencias. Por eso, además, las tensiones nacionalistas se agudizan cuando el gobierno recae en manos de quienes se sienten cómodos en la visión de España de los siempre vencedores, de quienes sienten orgullo y no pudor por heredar su discurso y enarbolar sus mismos símbolos. La pretendida "disposición trágica del alma española", el quimérico "fuego interior que nos consume", todas esas absurdas metáforas para describir qué pasa en España, no esconden, en realidad, más que una querrela entre visiones y sentimientos simétricos y cada vez más anquilosados. Aunque eso sí, pugnando siempre por arrastrarnos a todos. <